

CAPÍTULO XXIV

LA EDUCACION Y LA PRENSA EN EL SEXENIO DEL PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID

A pesar de la aguda crisis económica que aquejaba el país, la opinión pública no cesó de referirse a la educación, como lo indican las siguientes páginas. Los temas más frecuentemente citados fueron: 1) la calidad y la expansión del sistema educativo, 2) los factores de la crisis, 3) el analfabetismo, 4) el presupuesto, 5) la descentralización y 6) los logros.

1. LA CALIDAD Y LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Según Jaime Castrejón, el sistema educativo tenía un promedio de escolaridad de 3.5 años y su crecimiento costaba un gran esfuerzo, pero no demostraba gran eficiencia; era un logro que la matrícula creciera al ritmo de la demanda social; pero, al parecer, la SEP atendió al crecimiento no a la calidad. Respecto de la escolaridad, el estado de Sonora tenía el mayor promedio: 7.9%; Chiapas, el menor: 1.6%. Los estados de Nuevo León, Baja California Norte, Puebla, Coahuila y el D.F. oscilaban entre 7 y el 5% de promedio: Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Guerrero, Tabasco y Oaxaca reportaban menos del 3% (*Proceso*, enero 17 de 1983).

Ante el desarrollo tan desigual en los estados de la república, Jesús Reyes Heróles, secretario de Educación, se propuso alfabetizar y escolarizar a todos los mexicanos posibles. Reconoce que encara una disyuntiva, por un lado, atender el crecimiento con la oferta abierta a todo mexicano y, por otro, cuidar la calidad con una profunda formación personal. Concluye que debe lograrse la calidad y la excelencia académica a partir de la masificación de centros de docencia media y superior (*El Universal*, marzo 21 de 1983).

El Universal (marzo 22 de 1983), a su vez, recuerda que la política educativa debe combatir la gran distancia entre la formación educativa y las necesidades sociales y no ser ajena a la política social que pretende aligerar los contrastes.

Los gobiernos manejan el problema educativo en cantidades: aulas, alumnos, maestros, presupuesto; la Unión Nacional de Padres de Familia y COPARMEX acusan al gobierno de reducir la educación a un mero instrumento político (*Proceso*, abril 16 de 1984).

Y Gerardo Galarza informa que, en primaria, deserta el 47% de los alumnos; en secundaria, el 24%; en media superior, el 39% y, en licenciatura, el 49%. Además, los índices de reprobación son: primaria, el 17%; secundaria, el 25%; educación media superior, el 35%. La reprobación en el primer año de primaria en el medio rural es de 22%, en el urbano es de 14% (*Proceso*, diciembre 20 de 1984).

La Reunión Internacional de Análisis Educativo, por su parte, citó algunos indicadores importantes para países en vías de desarrollo: la inadecuada preparación de los profesores, la falta de incentivos económicos y académicos, la necesidad de obligarlos a actualizarse y, finalmente, la gran distancia entre la formación educativa y las necesidades sociales. Otro aspecto de la calidad de la labor educativa depende de los libros de texto. Andrea Bárcena dice que la modernización de éstos no corresponde a la práctica pedagógica. Más y mejores libros no garantizan mejores escuelas. Un diagnóstico general revela que sobran datos y libros y faltan oportunidades para ejercitar la reflexión y la creatividad (*El Universal*, octubre 13 de 1985).

Convendría cuestionar la gratuidad de los libros de texto ante una escuela cada vez más costosa e ineficaz. En el ciclo escolar 1985-1986, se inscribieron 200 000 niños menos que en el anterior, y no solamente debido a la estabilidad de la tasa de natalidad. La renuncia voluntaria al derecho constitucional de recibir educación aumentó en la población escolar: 50% de los niños no terminó primaria; entre el 30% y el 40% desertó y reprobó en los dos

primeros grados. Por tanto, de 93 millones de libros distribuidos, 40 millones no se usaron. Es aberrante una pedagogía fundada en el uso formal de libros. El dato de que sólo el 49% de alumnos inscritos en primaria la termine, en un país con educación obligatoria desde inicios de este siglo, pone en duda el acceso de México a la modernidad (*La Jornada*, noviembre 26 de 1985).

Olac Fuentes Molinar hace una reflexión sobre la crisis educativa. A partir de 1982, el ritmo de crecimiento del sistema educativo disminuyó: la población joven no recibe nuevas oportunidades de educación en relación con su propio crecimiento. Desde ese año, el sistema escolar que había crecido 2% cada año experimentó una expansión de manera desigual: preescolar creció 11% anual; primaria (la más afectada) se redujo en 400 000 alumnos, y la población demandante para primer ingreso aumentó. Sexto grado conservó el mismo número; su mejoramiento está detenido. En secundaria, el crecimiento disminuyó 5% y en preparatoria, 8%.

En los 12 años anteriores a la crisis económica, la educación nacional avanzó, aunque de manera desigual. Había posibilidades de recibir capacitación básica y la formación de una cultura moderna resultaba evidente; pero tales conquistas se estancaron (*La Jornada*, septiembre 3 de 1987).

2. LOS FACTORES DE LA CRISIS

Desde el año anterior, José Angel Pescador reducía a cinco los principales problemas: analfabetismo, pobre calidad educativa, distribución inequitativa de oportunidades escolares, rezago educativo y una política cultural de carácter nacionalista (*El Universal*, abril 21 de 1982). A esos problemas Pablo Latapí añadió la pérdida de valores, la organización del poder político, la falta de reconocimiento a la labor de maestros eficientes, y el poder del SNTE que desplazaba al del Estado (*El Sol de México*, diciembre 8 de 1982).

Arquímedes Caballero, subsecretario de Educación Media, en el Foro de Consulta Popular del sector, reconoció que, desde el punto de vista cualitativo, la educación no era la misma para todos los niños mexicanos, debido a deficiencia en instalaciones escolares, escuelas incompletas, maestros impro-

visados, carencia de material didáctico, falta de talleres y laboratorios, desnutrición infantil, etc. (*UnomásUno*, febrero 9 de 1983).

Ramón Bonfil y Miguel Huerta reconocieron que la educación estaba planeada cuidadosamente por verdaderos apóstoles de la enseñanza, quienes dieron contenido e identidad a los conceptos para formar la nueva patria; pero, al pasar de los años, se desvirtuó la identidad de dichos conceptos; ahora, el contenido es amorfo, la educación perdió su rumbo y, por ello, no hay planeación (*Excélsior*, mayo 31 de 1983).

Se podrían citar otras causas de esta crítica situación, por ejemplo, los constantes cambios de programas educativos que ocasionan mala calidad. Es difícil que tales programas maduren sin continuidad; cada vez se exige menos al estudiante; no existe temor de reprobar, pues es fácil recuperarse; además, se pretende abarcar muchos temas en poco tiempo.

Otros puntos dignos de atención son el número de maestros no titulados (85%); la falta de interés de la población infantil, problema que exige mayor atención (el 10% de los niños mexicanos requiere educación especial), y el DIF es insuficiente para encargarse de todos (*El Universal*, julio 2 de 1985; *La Jornada*, julio 2 de 1985).

Martha Robles llegó a afirmar que la SEP sólo entretiene a los escolares en aulas medio-alfabetizadoras, sin gramática, sin historia, sin matemáticas, cuando una verdadera educación implica formar un pensamiento crítico (*Excélsior*, septiembre 29 de 1986).

Al enumerar las causas que provocan esta situación, deben incluirse algunas de orden económico, como el costo real de asistir a una escuela: el uniforme diario, el de deporte, las cuotas modestas para material didáctico, la fotografía del grupo escolar, la danza como taller, con el obligado traje para participar en festivales, las cuotas diversas para pintar bancas, comprar pizzas, etc.; las cooperaciones para los cumpleaños del director, de la maestra, etc. Estas exigencias iban en contra de la situación del país, donde solamente en el Distrito Federal 3 000 establecimientos quebraron; el consumo del pan bajó alarmantemente. Dos millones de alumnos adolecían de retraso mental por falta de alimentos (*La Jornada*, noviembre 5 de 1986). Finalmente, Martha Robles retomó el tema de la crisis educativa y señalaba la desigualdad y las deficiencias humanas como el verdadero resultado de la obra

de la SEP en varias generaciones. No existía un programa sólido ni congruente; ni se había definido el modelo de mexicano deseable para el futuro. La investigación era escasa: abundaban los ensayos de métodos de enseñanza; existía una persistente deficiencia en el magisterio, con lecturas limitadas, deportes escasos, nula musicalidad, aprendizaje mal orientado y pésimo servicio bibliotecario. Los problemas existentes deberían ser compatibles con nuestra capacidad para resolverlos. Se requería salir de la escuela con algún saber práctico, para ganarse la vida, y con una preparación para superarse en sociedad. Hoy, en cambio, se forma a una sumisa multitud, incapaz de examinar sus circunstancias y menos de transformarlas. Cualquier alfabetizado desprovisto de ideas acusa una enseñanza ociosa (*Excélsior*, septiembre 11 de 1987).

3. EL ANALFABETISMO

Otro tópico constante en la prensa fue el del analfabetismo: había 5 500 000 analfabetos y 20 500 000 mexicanos sin terminar la primaria. En total, 26 millones, una tercera parte de la población nacional (*Excélsior*, septiembre 24 de 1982).

Se trataba de un analfabetismo real y funcional. Jaime Peña Z., responsable del Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF) del INEA, afirmaba que el 75% de adultos desertaba de los grupos por no adecuarse a los horarios, falta de material o carencia de motivación. PRONALF denunció pugnas entre la SEP y el INEA, en la apropiación de programas de alfabetización y sus resultados. En abril de 1981, la SEP estableció el PRONALF para atender a un millón de personas por año. En agosto de ese año, se creó, por decreto presidencial, el INEA. El PRONALF pasó entonces a ser parte de aquél para terminar con el rezago educativo de 26 millones de adultos analfabetos, el cual, lejos de abatirse, aumentó ese año a 28 millones. El personal del INEA asegura, con documentos en la mano, que el PRONALF fracasó en comunidades marginadas y denunció que a los promotores encargados de localizar analfabetos e integrar círculos de estudio no les pagaban su salario, si no reunían diez o más educandos. De ahí, inventaban nombres y direcciones. Además, los mismos alfabetizadores desertaban, condición que provo-

caba la desintegración del grupo de estudio (*Proceso*, marzo 28 de 1983). El Consejo Nacional de Población (CONAPO) dio las siguientes cifras: de los 78 248 100 habitantes (en 1985) del país, 13% eran analfabetos, es decir, 10 172 253. Pero si se consideraba como tales a los que delectaban, el número se elevaba a 33 millones (*Excelsior*, abril 29 de 1985). De estos números, Celia Solís, directora de Educación Básica del INEA, refería que tres cuartas partes eran mujeres (*El Día*, junio 28 de 1985). Desgraciadamente, la UPN preparaba solamente a 30 futuros maestros para atender la educación de adultos (*El Universal*, junio 11 de 1985).

4. EL PRESUPUESTO

Un tema menos comentado, pero no por eso carente de importancia, era el del presupuesto: en 1982 la SEP contó con un presupuesto de 800 000 millones de pesos; y atendió a 22 millones de alumnos. El costo por alumno fue, por tanto, de \$36 363 anuales (*El Universal*, marzo 18 de 1983).

De acuerdo con un artículo de Sergio Vázquez, el costo anual por alumno en 1983 bajó a \$14 463 y, en 1985, a \$35 226 (*El Día*, septiembre 9 de 1985). En 1986 se destinaron 964 000 millones de pesos para educación, con un promedio de \$40 000 al año por alumno (*El Herald*, septiembre 9 de 1986).

5. LA DESCENTRALIZACIÓN

Con este panorama ante sus ojos, el secretario de Educación, Jesús Reyes Heróles, propuso llevar a cabo la descentralización educativa. Carlos Sirvent comentaba que el programa era importante, no sólo por desconcentrar con el objetivo de lograr mayor eficiencia administrativa, sino por pretender recuperar la cultura local, la participación de la comunidad para el desarrollo regional y, sobre todo, mejorar la calidad de la enseñanza.

El programa de descentralización proponía establecer un comité consultivo en cada estado, el cual se encargaría de transferir a los gobiernos estatales los servicios de educación básica y normal, hasta entonces en ma-

nos de la federación. Los mismos estados debían asumir las tareas de planeación con la modalidad propia de cada región (*Excélsior*, agosto 22 de 1983).

Reyes Heróles presentó el programa de descentralización como parte de toda una Revolución Educativa, y definió dos objetivos importantes de ésta: 1) mejorar la calidad de la enseñanza y 2) descentralizar los servicios educativos para desterrar hábitos y costumbres estereotipadas. Marco Antonio Aguilar criticó esa idea. Una revolución la hacía el pueblo, no la burocracia. El nombre de revolución –aseguraba– no hacía la acción (*Excélsior*, octubre 21 de 1983).

Reyes Heróles mencionó, como otro de sus objetivos, vincular la enseñanza con la vida, con la realidad (*Excélsior*, septiembre 18 de 1984), pero reconocía que la Revolución Educativa pretendía convertirse en un movimiento impulsor de una nueva moral. La educación no es el remedio para todos los problemas, ni puede cambiarse una sociedad radicalmente a través de ella, pero puede movilizar las conciencias en la búsqueda de una sociedad mejor (*Proceso*, diciembre 10 de 1984).

La prensa comentó el proyecto de la descentralización educativa. El profesor Alberto Miranda, secretario general del SNTE, criticó la descentralización educativa, pues haría desaparecer la uniformidad en la educación. Produciría una dispersión ideológica de la enseñanza (*El Sol de México*, junio 20 de 1985). Ya desde inicios del sexenio, este profesor aseguraba que el proyecto de descentralización, ajeno al SNTE, creaba muchos problemas, lastimando la estructura unitaria de la organización sindical (*Proceso*, febrero 14 de 1983). Es decir, primero estaba la unidad del sindicato que el bien de los niños. ¡Curiosa jerarquía de valores!

Por otra parte, según el profesor Víctor Hugo Bolaños, del área de coordinación general para la descentralización educativa de la SEP, este proyecto acabaría con la incoherencia de los programas educativos; se atenderían regionalmente las necesidades de los habitantes de cada estado; la educación sería más objetiva y precisa; disminuiría el gigantismo burocrático, etc. (*El Nacional*, junio 24 de 1985).

Tal disparidad de opiniones continuó aún con el nuevo secretario de Educación Pública, Miguel González Avelar, sucesor de Reyes Heróles. An-

tonio Jaimes reconoció las fricciones entre la SEP y el SNTE pues, según él, se marginó a este último en las decisiones de la Secretaría. Además, consideró que la descentralización era una maniobra política para dar mayor independencia a los estados. González Avelar contestó que los cambios no eran intempestivos, ni contra el SNTE. Era una medida razonada y conveniente para todos (*El Sol de México*, febrero 7 de 1986). En otra declaración, al preguntarle a González Avelar hasta cuándo se llevaría a la práctica la Revolución Educativa, éste respondió que no se había abandonado la idea, pero que se necesitaba reclutar revolucionarios para realizarla (*El Universal*, marzo 20 de 1986).

6. LOS LOGROS

El CONALTE proporcionó las siguientes cifras de la población escolar: la matrícula en preescolar aumentó: 1978-1979, 15%; 1982-1983, 70%. La primaria atendía desde septiembre de 1980 la demanda total en el país. Se efectuaba una revisión permanente sobre métodos y contenidos de programas escolares (*El Día*, enero 24 de 1983).

Las estadísticas se detuvieron ante la catástrofe del sismo de septiembre de 1985; se alteró el periodo de clases en algunos estados de la república y, en especial, en el Distrito Federal. Tres meses después, la SEP había asegurado ya en aulas provisionales, en parques públicos, en lotes baldíos —la mayoría de aquéllas construidas de lámina acanalada o de conglomerado y solera— clases para todos los alumnos de primaria (*Novedades*, diciembre 3 de 1985).

Las estadísticas a fines de 1985 eran: 80% de cobertura en preescolar: 2.5 millones (en 1978 era sólo el 15%); 100% de cobertura en primaria: 15 millones (en 1980 eran 14 300 000); 90% de cobertura en secundaria: 4 millones (en 1982 eran 3 600 000). Entre 1982 y 1985 se construyeron 11 000 escuelas y se contrataron 110 000 maestros (*UnomásUno*, diciembre 30 de 1985).

Como dato de finales de sexenio, se habló de garantizar 11 años de educación básica a todo mexicano; disminuyó el analfabetismo de 14.3 a 6.12; en los 250 locales de CONALEP se atendieron a 71 000 alumnos; se construyeron 15 800 escuelas, es decir, el 60% de las obras del CAPFCE

desde su fundación; se reconstruyeron 182 unidades escolares y se editaron 1 200 obras (*Excélsior*, mayo 17 de 1988).

José Angel Pescador sugirió que la educación debía desarrollar aspectos ético, social, intelectual, afectivo y productivo, para mejorar la calidad de vida. Y añadía: una educación con calidad debe responder a las necesidades reales de cada comunidad; considerar los intereses y situación laboral de los maestros; adecuar los contenidos y los materiales; y cuidar la relación escuela-comunidad. Sólo así sería una escuela útil y necesaria, no obligatoria e irrelevante (*El Universal*, abril 21 de 1983).

Antonio Magaña opinó que la enseñanza no era uniformar, sino formar; era preciso abandonar la enseñanza verbal y formar ciudadanos (*El Nacional*, julio 8 de 1983).

Según Raúl Olmedo, en la educación han predominado los valores urbanos sobre los rurales, los valores de la facilidad especuladora sobre los del trabajo y la responsabilidad (*Excélsior*, abril 1o. de 1985). Se necesitaban hombres de entendimiento y de voluntad, no máquinas repetidoras, aseguraba Marisol López (*El Sol de México*, febrero 28 de 1986).

Ante años de abandono educativo, mucha era la ignorancia acumulada y la indefinición de principios nacionales (*Excélsior*, septiembre 22 de 1986). Se trataba hasta ahora de una educación que entrenara al individuo para que funcionara sin conflicto, pues transformaba al niño de ser curioso e inquieto en individuo apagado, sin espíritu crítico, con todo hecho y nada por hacer (*La Jornada*, septiembre 30 de 1986). El individualismo, la competencia, la falta de solidaridad, la ignorancia de los símbolos democráticos, el culto al consumismo, eran características de algunos medios escolares (*La Jornada*, octubre 29 de 1986).

Para Elda Montiel, las prioridades en educación eran: elevar la calidad de la enseñanza, incrementar la capacidad académica, vincular la docencia con la investigación y la educación con las necesidades del desarrollo nacional (*El Día*, enero 6 de 1987).

La Confederación Nacional de Escuelas Particulares criticó que la educación se refiriera sólo a la inteligencia y descuidara formar la voluntad, los valores humanos, y la moral (*El Universal*, abril 25 de 1987).

Otro comentario al respecto partía de una pregunta: ¿Por qué no se enseñaba ética en las escuelas? No mentir, no robar, respetar al prójimo, la

vida ajena y la propia, rechazar los vicios... La respuesta era que los maestros se tendrían que comprometer a poner en práctica lo que enseñaban en el salón de clases. La irresponsabilidad de los maestros se sumaba a la gran lista de fallas en el sistema educativo (*Excelsior*, octubre 1o. de 1984). Ante esas críticas, González Avelar declaró: falso es que la educación mexicana no transmita valores, ni pautas éticas. El artículo 3o. contiene un humanismo social de naturaleza ética. El Estado mantiene a la población ajena a los fanatismos, la servidumbre y los prejuicios, y orienta con criterio democrático y nacional (*La Jornada*, mayo 16 de 1987). Sin embargo, ni el humanismo social del Art. 3o., ni el cuidado de mantener a la población ajena a los fanatismos, la servidumbre y los prejuicios liberan a la escuela de la necesidad de enseñar la moral social.